La Acumulación por Desposeción en el Sector Campesino de Córdoba. El Rol del Estado.

Dalmira Pensa.

Cita:

Dalmira Pensa (2007). *La Acumulación por Desposeción en el Sector Campesino de Córdoba. El Rol del Estado. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-066/366>

XIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA (ALAS)

“Latinoamérica con y desde el mundo. Sociología y Ciencias sociales ante el cambio de época: legitimidades en debate”

Guadalajara, México. *13 al 18 de agosto de 2007,*

Grupo de trabajo: Desarrollo rural, globalización y crisis

Título: El papel del Estado, la “acumulación por desposesión” en el sector Campesino de Córdoba

Autoras: Mgter. Dalmira Pensa. Lic. Susana Roitman.

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba

INDICE

- 1. Presentación**
- 2. El problema observado, una manera de abordarlo**
- 3. El Estado, manifestaciones de su accionar. Disposiciones legales; los discursos desde el Estado; sentencias**
- 4. Posicionamientos frente al despojo: El Movimiento Campesino**
- 5. Comentarios finales**

1. Presentación

Aquí exponemos los primeros resultados de un trabajo de investigación que observa las transformaciones ocurridas en el sector norte de la provincia de Córdoba, Argentina, en los últimos 15 años, como consecuencia de lo que se llama la *ampliación de la frontera agropecuaria*. En particular analizamos el rol del Estado atendiendo a diversos aspectos de su accionar.

Hasta hace dos décadas la modalidad de acumulación por reproducción ampliada de la fuerza de trabajo era la dominante y de algún modo generaba expectativas de progreso en diversos grupos de trabajadores –de la industria, comercio, servicios-. Hoy nos encontramos con que la modalidad de acumulación por desposesión vuelve a ocupar un

lugar destacado –como al inicio de este modo de producción- mostrando su violencia de manera más explícita.

En Argentina, a partir de 2002 adquiere visibilidad a través de los medios de comunicación una problemática que había comenzado a agudizarse unos años antes; esto es la desposesión de las tierras que sufren numerosas familias de habitantes tradicionales. En este caso nos detenemos a observar lo que ocurre en las comunidades campesinas del norte de la provincia de Córdoba. Allí se observa la expulsión sistemática de personas que vivían en esos parajes desde épocas ancestrales, a manos de empresarios capitalistas o testaferros de especuladores. Esto tiene un costado silencioso: propiedades vendidas a precios irrisorios, campesinos que abandonan sus predios ante la ausencia total de servicios públicos, familias que se retiran frente a diversos modos de amenazas –de policías locales o de empresarios forasteros-; y otro costado más conflictivo, donde las organizaciones del movimiento campesino ayudan a la resistencia y a poner en la agenda social el problema del despojo.

El Estado, en sus distintos niveles, no está ausente frente a esta situación, por el contrario, recurriendo a diversas modalidades, interviene directa o indirectamente a favor del capital concentrado, si bien realiza acciones de variada naturaleza –veremos particularmente aspectos legislativos y discursivos- para oscurecer esta intervención y para legitimar su existencia.

Los grupos campesinos, aislados en su geografía, su economía, su cultura, etc. apelan a incipientes mecanismos de organización, no sólo resistiendo sino cuestionando fuertemente la legitimidad de un sistema de organización social que atenta directamente contra los seres humanos y el hábitat que los alberga.

En primer lugar, mostraremos las transformaciones socioeconómicas de la región estudiada tomando como base los censos agropecuarios, económicos y poblacionales; seguidamente ahondaremos nuestro marco teórico referido del papel del Estado en el proceso de acumulación, a partir de allí analizaremos los mecanismos a los que recurre para favorecer la acumulación por una parte y para lograr algún grado de legitimación por la otra. Por último haremos una breve aproximación a la mirada del sector campesino.

2. El problema observado, una manera de abordarlo

La situación que atraviesan estos grupos campesinos tiene su correlato en el modelo de acumulación implementado en el país a mediados de los '80 del siglo XX, el cual responde en gran medida a lo que Harvey caracteriza como “modelo de acumulación por desposesión”. En la región bajo análisis la expansión del cultivo de la soja y el corrimiento de la ganadería hacia zonas antes marginales pone en valor tierras que hasta ese momento eran consideradas improductivas, y presenta como sistema de producción atrasado, inviable y sujeto a desaparición al modelo de subsistencia que albergaba a las familias campesinas.

Siguiendo los lineamientos de los llamados autores post colonialistas, sostendremos que el sistema mundo capitalista se caracteriza por tener como motor o fuerza impulsora la acumulación de capital (Wallerstein, 2001) Esta acumulación puede llevarse a cabo a través de la explotación del trabajo asalariado y en consecuencia por la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo (Negri y Hart) o a través de otras modalidades de acumulación que David Harvey llama de desposesión (Harvey, 2005) muy extendidas al inicio del capitalismo. Ambos modos de explotación conviven a su vez con la de trabajadores no asalariados –desocupados, microemprendedores- que contribuye indirectamente a posibilitar dicha acumulación.

En la zona estudiada, comprendida por los departamentos Ischilín, Tulumba y Sobremonte, podemos observar la presencia de ambos mecanismos, por una parte existen explotaciones agropecuarias organizadas bajo el modelo de empresa capitalista las cuales disputan el territorio a los antiguos pobladores que viven bajo un modelo de subsistencia.

En todos estos departamentos se produjeron profundas transformaciones en los últimos quince años (1988 -2002). Los datos censales muestran que se dio una caída en el número de explotaciones del 26,5% -un total de 582 unidades productivas menos- (Cuadro 3), esto ha sido acompañado por un cambio en las características demográficas de la región: mientras la población crece –en cantidades variables- en todos los departamentos, la población rural dispersa disminuye en forma importante, 17% en promedio (Cuadros 1 y 2), es decir que ocurre una migración desde estos parajes rurales hacia los centros urbanos.

Cuadro 1: Características Demográficas de los departamentos de Ischilín, Sobremonte y Tulumba – Población Total

Departamento	Censo 1991	Censo 2001	Variación Absoluta	Variación Relativa	Tasa media anual de crecimiento*
Ischilín	28.339	30.105	1.766	6,23%	5,8
Sobremonte	4.196	4.531	335	7,98%	7,3
Tulumba	11.291	12.211	920	8,15%	7,5

*Tasa media anual de crecimiento exponencial, por mil habitantes.

Fuente: INDEC. Censo Nac. de Población y Vivienda 1991 y Censo Nac. de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 2: Características Demográficas de los departamentos de Ischilín, Sobremonte y Tulumba – Población Rural dispersa

Departamento	Censo 1991	Censo 2001	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ischilín	4.491	3.481	-1.010	-22,49%
Sobremonte	2.061	1.901	-160	-7,76%
Tulumba	6.071	4.602	-1.469	-24,20%

Fuente: Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba

Si consideramos la disminución en el número de explotaciones agropecuarias asociada al incremento de la superficie implantada, podemos inferir un proceso de concentración de la tierra. Esto también se corresponde con la evidencia de la disminución de explotaciones de menos de 500 hectáreas –pequeños y medianos productores- (Cuadro 3)

Cuadro 3: Características Agropecuarias de los departamentos de Ischilín, Sobremonte y Tulumba – Cantidad Total de Explotaciones Agropecuarias

Departamento	1988	2002	Variación Absoluta	Variación Relativa	Pequeños y Medianos productores (<500 has.)	
					1988	2002
Total Provincial	40.817	26.226	-14.591	-36%		77%
Ischilín	698	588	-110	-16%	80%	70%
Sobremonte	337	241	-96	-28%	63%	54%
Tulumba	1166	790	-376	-32%	86%	73%
Total General	2201	1619	-582	-26.5%		

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 -Gcia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba-
Censo Nacional Agropecuario 2002 -INDEC-

Por otra parte, si llevamos nuestro análisis a lo que ocurre con la producción, encontramos que la superficie implantada (cereales, oleaginosas, forrajeras, bosques y montes) se ha incrementado considerablemente, un 200% (Cuadro 4) en desmedro de las tierras dedicadas a bosques y montes naturales o sin uso agropecuario, 46%. Este fenómeno que se combina con un significativo aumento de la superficie cultivada con oleaginosas (Cuadro 5) y la disminución de la población rural se conoce como el *corrimiento de la frontera de la soja*

cuyos efectos fueron analizados en diversos estudios en otros casos del país (Giarracca y Teubal, 2005; Tenencia y Food, 2005). Estos estudios muestran el proceso de desposesión que sufren los sectores campesinos y la correlativa destrucción de formas comunitarias de subsistencia de estos grupos sociales y de los ambientes naturales.

Cuadro 4: Uso de la tierra de los departamentos de Ischilín, Sobremonte y Tulumba

Destino	Superficie destinada (Has)		% Superficie total		Variación
	1988	2002	1988	2002	
Superf. Implantada	67.391	200.478	6,1%	18,5%	197%
<i>Cultivos</i>	11.283	78.434	1,0%	7,2%	595%
<i>Forrajeras</i>	53.938	119.440	4,9%	11,0%	121%
<i>Bosques y/o Montes</i>	78	123	0,0%	0,0%	58%
<i>Otros</i>	2.092	2.481	0,2%	0,2%	19%
Pasturas Naturales	324.179	374.819	29,3%	34,6%	16%
Bosques/Montes nat.	643.861	486.067	58,2%	44,8%	-25%
Sin uso agropecuario	71.298	22.909	6,4%	2,1%	-68%
Total General	1.106.729	1.084.273	100,0%	100,0%	-2%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 -Gcia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba-
Censo Nacional Agropecuario 2002 -INDEC-

Analizando la estructura productiva en los tres departamentos observados en el mismo periodo y agrupando por cantidad de hectáreas afectadas según tipo de cultivos, encontramos que: las forrajeras crecen en un 122%, los cereales un 114% mientras que las oleaginosas lo hacen en un 3300% (Cuadro 5), siendo insignificante la incidencia del girasol. La explosión de las oleaginosas se explica así por el crecimiento de la soja, siendo su mayor avance en los departamentos Ischilín y Tulumba. Mientras en el departamento Sobremonte el mayor incremento se da en diversas forrajeras 253%, que no estaban clasificadas según categorías intercensales.

El corrimiento de la frontera agrícola y la explosión de la soja en la región adquieren mayor importancia aún al compararlos con los datos generales de la provincia (ver cuadro 7), donde el cultivo de soja a nivel global se incrementó en un 27%, porcentaje por demás modesto al compararlo con el 3300% de la zona estudiada.

Cuadro 5: Superficie implantada de los departamentos de Ischilín, Sobremonte y Tulumba

Departamentos	1988	2002	Variación absoluta	Variación relativa
	Forrajeras			
Ischilín	13.457	51.192		

Sobremonte	4.143	14.637		
Tulumba	36.338	53.611		
Totales	53.938	119.440	65.502	122%
	Cereales			
Ischilín	4.481	3.934		
Sobremonte	937	488		
Tulumba	4.216	25.803		
Totales	9.634	30.225	20.591	214%
	Oleaginosas			
Ischilín	215	4.278		
Sobremonte	-	120		
Tulumba	1.198	43.711		
Totales	1.413	48.109	46.696	3300%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 -Gcia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba-
Censo Nacional Agropecuario 2002 -INDEC-

Interesa también considerar la actividad ganadera por cuanto estos departamentos eran tradicionales productores de ganado caprino y de cría de ganado vacuno, el cual era llevado para su engorde a otras regiones. Esta actividad también ha sufrido transformaciones en el período examinado. La cría de ganado bovino se ha incrementado, considerando los tres departamentos, en un 28%, siendo en valores absolutos alrededor de 60.000 cabezas. Esto guardaría vinculación direcata con el aumento de la superficie destinada a forrajeras, ello podría estar mostrando una transformación desde la actividad de cría hacia la de cría y engorde. De todos modos, no se recuperan los valores de la década de 1970 -superiores en 10.000 cabezas de ganado, representando un 50% en más a la producción actual- En el caso del ganado caprino, producción tradicional en la zona, en el departamento Sobremonte la producción ha caído un 43%, en el departamento Tulumba hubo un incremento insignificante, el incremento solamente se ha dado con importancia en el departamento de Ischilín - 34%- . Comparando estos datos con los totales provinciales, vemos que el proceso es inverso, en la provincia se da una disminución en todos los tipos de ganado (Cuadro 6). Por lo tanto, encontramos que el corrimiento de la frontera no solamente trae aparejado un incremento de la producción de soja, si bien en menor medida, también se da un traslado en las producciones ganaderas tradicionales de la provincia.

Cuadro 6: Existencias de Ganado. Provincia de Córdoba

Ganado	Nº de Cabezas		Variación Absoluta	Variación Relativa
	1988	2002		
Asnales y mulares	9.578	3.658	-5.920	-62%
Aves (1)	s/d	1.381.013		
Colmenas	s/d	234.042		

Bovino	7.120.478	6.104.883	-1.015.595	-14%
Caprino	193.723	180.258	-13.465	-7%
Equino	193.012	96.505	-96.507	-50%
Ovino	275.338	151.245	-124.093	-45%
Porcino	1.060.904	465.295	-595.609	-56%
Otros	79.223	3.815	-75.408	-95%
Total General	8.932.256	8.620.714	-311.542	-3%

(1) Pollos, gallinas, pavos y patos

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 -Gcia de Estadísticas y Censos de la Prov. de Córdoba-
Censo Nacional Agropecuario 2002 -INDEC-

Esta transformación es semejante a la ocurrida en el área NE y NO del país donde “...el *modelo agropecuario hegemónico* se consolidó alrededor del desarrollo del paquete tecnológico de la soja RR (resistente al glifosato) y la siembra directa (no remoción del suelo)” tal transformación muestra que los procesos no se restringen sólo a problemas propios del agro, sino que “*expresa procesos más amplios referidos a la reorganización territorial del país, a cambios en el ejercicio del control de los recursos naturales, a la disputa tanto al interior de los saberes científicos como entre estos saberes y los de sentido común y a la acentuación del agro como productor de insumos para la agroindustria de exportación y ya no como productor de alimentos para las poblaciones locales* (Domínguez y Sabatino 2006, p.214 y 217)

Cuadro 7: Superficie Implantada. Provincia de Córdoba

Cultivos	Superficie Cultivada (Has)		Variación Absoluta	Variación Relativa
	1988	2002		
Forrajeras	4.123.535	2.676.960	-1.446.575	-35%
Cereales	1.332.373	2.155.279	822.906	62%
Maíz	523.527	819.056	295.529	56%
Trigo	618.716	1.259.874	641.158	104%
Sorgo granifero	190.130	76.349	-113.781	-60%
Oliaginosas	2.104.630	2.300.450	195.820	9%
Girasol	328.300	187.755	-140.545	-43%
Soja	1.665.121	2.112.695	447.574	27%
Mani	111.209	220.137	108.928	98%
Industriales y otros		251.571	251.571	
Hortalizas	24.000	17.974	-6.026	-25%
Frutales	6.500	5.456	-1.044	-16%
Bosques y/o Montes	36.685	29.649	-7.036	-19%
Total General	7.627.722	7.437.338	-190.384	-2%

* Valores aproximados del censo 1988

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 -Gcia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba-
Censo Nacional Agropecuario 2002 -INDEC-

Sintetizando, observamos que en la región estudiada se produce un comportamiento semejante a lo sucedido en otras regiones que han sufrido el impacto del nuevo modelo productivo agropecuario. A semejanza de lo ocurre en esos lugares, en distintos momentos

y con particularidades en cada zona, se dan los siguientes fenómenos a) incremento de la superficie destinada a explotaciones sojeras, con el consecuente desplazamiento del monte nativo o de unidades dedicadas a otras actividades rurales como la cría de ganado menor o mayor; b) incremento en la superficie de las unidades económicas, las que en la mayoría de los casos se constituyen en empresas que se rigen por los nuevos patrones tecnológicos – siembra directa, semilla transgénica- y nuevas formas organizativas; c) proceso migratorio de la población rural hacia los centros urbanos próximos ; d) cambios en la relación tierra-trabajo; a esto se suma otra característica que veremos más adelante e) surgimiento de nuevos actores sociales y cambio del perfil de otros, en lo relacionado a la propiedad de la tierra, la aparición de contratistas, arrendatarios, etc.

Toda esta transformación no resulta explicada por el simple accionar económico, el Estado juega un rol esencial como se verá seguidamente.

3. El Estado, manifestaciones de su accionar

Si comprendemos el capitalismo como un “sistema mundo” cuya lógica es la acumulación interminable, ya sea por reproducción ampliada o por desposesión, el Estado tiene un papel central en la lógica del sistema. De hecho, es impensable la institución del capitalismo al margen de los Estados.

El Estado posibilita la acumulación a través de múltiples intervenciones (subsidios, aranceles, confiscaciones, fallos, etc) al tiempo que mantiene el orden social favorable a la acumulación ya sea administrando la violencia o apelando a concesiones y negociaciones con los actores sociales, de este modo legitima su autoridad, en el marco general del conflicto capital-trabajo. Por eso, "*rara vez es simplemente el Estado del capital, también es el producto del conflicto entre el capital y la sociedad*" (Amín, S. 2003: 257).

Por ello interesa considerar el proceso de legitimación seguido, el cual opera como fundamento de su existencia. Si bien el Estado sirve a la acumulación interminable del capital, al mismo tiempo busca conservar su legitimidad, esto es, la disposición y la aceptabilidad colectiva de su arbitrariedad (Ceceña, A. 2004).

En el espacio estudiado, encontramos que por una parte se dictan leyes como la que crea el Registro de Poseedores, que veremos más adelante, el cual se presenta como un medio para

favorecer la regularización de los títulos de propiedad de los campesinos y a la par se interviene a través de la policía o de los juzgados a favor de los empresarios capitalistas.

Tratando de interpretar los modos de actuación del Estado en torno a la acumulación capitalista es posible distinguir tres concepciones: (Laclau 1997) la mirada epifenoménica o superestructural de un modo de producción, la perspectiva instrumentalista de clase y la concepción del Estado como un medio de articulación de intereses.

Según la primera perspectiva, el Estado cumple fundamentalmente una función reproductiva de las relaciones capitalistas, de modo que existe una subordinación del Estado al capital al punto de que ningún cambio histórico devendría fuera del espacio político estatal. La segunda posición sostiene que el Estado se coloca como un instrumento de las clases antagónicas de modo que las transformaciones históricas dependen de cómo se configuren las relaciones de poder en el espacio del Estado, así el Estado sería una herramienta “neutral”. Es a partir de Gramsci que la discusión en torno al Estado abandona el reduccionismo económico e introduce la lógica política entendida como un hacer permanente que articula intereses y necesidades divergentes.

En una línea semejante a esta última en algún punto los autores postcolonialistas, a los cuales tomamos de referencia en este trabajo, cuestionan la división entre los planos económico, político y social, proponiendo una mirada holística para el análisis de la economía mundo. De modo que no pueden ser caracterizados ni como instrumentalistas ni como epifenoménicos porque desechan la separación de la política y la economía y /o la reducción de una a otra. Sin embargo, tampoco pueden ser considerados estrictamente gramscianos. Según ellos, el Estado garantiza la acumulación de capital y neutraliza el conflicto social. Así, el capitalismo es inseparable del Estado en cuanto éste interviene como autoridad colectiva representando al capital en su conjunto. Sin embargo, como las tendencias de la acumulación siempre chocan con las fuerzas sociales, el Estado interviene de una manera dual, ya sea manteniendo el orden a través de la administración de la violencia, o bien reduciendo la lucha de clases apelando a diversas combinaciones de negociaciones y concesiones.

Por otra parte, siguiendo a Wallerstein, I. (2001), para analizar la acumulación capitalista es necesario entender que esta no se impone como una fuerza sobrenatural. Las tendencias del capital chocan y se acomodan a las fuerzas sociales. La presencia de movimientos

antisistémicos que debilitan o refuerzan el sistema, caracteriza a la economía mundo capitalista. Según los autores postcolonialistas (Wallerstein 2001 y Amín 2003) nos encontramos en un momento de transición, donde el sistema histórico basado en la acumulación incesante ha llegado a su fin, pero las configuraciones emergentes no están definidas de antemano. Son momentos singulares, contingentes, se abren posibilidades para el ejercicio electivo de los agentes. Aquí cobra sentido la mirada a los movimientos sociales, como es el caso del movimiento campesino.

Y es desde esta perspectiva desde donde se articula una relación particular entre modelo de acumulación/ movimientos sociales. Es decir que no se abandona el ámbito de la reproducción material para pensar los movimientos sociales, si bien tampoco se prescinde de las identidades culturales o los vínculos territoriales, como los que establecen los nativos de las tierras en disputa en el caso del norte de Córdoba. Tal como se puede observar con diversos movimientos sociales contemporáneos de América Latina en la última década, los cuales combinan trabajo, identidad cultural, defensa del territorio y del ambiente, procurando conservar su autonomía y articulándose en redes extensas (Zibecchi 2003).

En este trabajo es posible apreciar el papel que juega el Estado argentino en sus tres niveles en cuanto garante del modelo de acumulación, tanto a través de su participación en el proceso de acumulación por desposesión en la zona bajo estudio –legislación que deja en horfandad a los campesinos, actuación del Poder Judicial, etc.-, como a través de acciones de legitimación que le permiten presentarse ante la sociedad como representante del bien común –discursos de algunos funcionarios, creación de instituciones que se presentan como defensoras de los sectores excluidos-.

Los relevamientos empíricos se concentran así en tres manifestaciones clave de este accionar del Estado: el plano jurídico (normativas que impactan directamente en la propiedad de la tierra, del agua y de los bosques); el plano discursivo (explicaciones que producen agentes del gobierno ante estos hechos); y acciones de intervención concreta, actuación del Poder Judicial y Policía frente a casos de desposesión que le son planteados.

a) Disposiciones legales

Al analizar las actividades del Estado provincial en relación con los mecanismos más importantes desarrollados y que han contribuido a reforzar el proceso de acumulación de capital, nos encontramos con normas dictadas en el periodo estudiado, las cuales afectan directamente a grupos sociales que realizan trabajos reproductivos, tal el caso de estos

campesinos que subsisten en condiciones muy desfavorable y ven que sus tierras le son apropiadas por diversos mecanismos.

Orientadas en gran medida a estos grupos sociales –propietarios de tierras sin los títulos saneados- se dictaron, entre el año 2000 y el 2004 tres leyes: 8884/00; 9100/03; 1950/04, las que analizamos seguidamente.

Ley N° 8884/00 Esta ley contemplaba un procedimiento poco oneroso por el cual el poseedor de un bien inmueble al final del trámite lograba el título del mismo. Por tal motivo, se puede afirmar que técnicamente tenía por objeto sanear los títulos, sin embargo nunca se aplicó por falta de reglamentación, lo cual se puede atribuir a una ausencia de voluntad política. Resultó derogada en forma total por la ley 9100/03 a través de su Art. 30.

Ley N° 9100/03 Si bien se la presenta como una ley de saneamiento de títulos no opera como tal por cuanto el procedimiento que contempla no concluye con el otorgamiento de títulos de propiedad. Sólo crea un Registro Personal de Poseedores para que las personas que invoquen y acrediten la posesión de un inmueble, se inscriban en él, (Art. 1), sin perjuicio de los derechos que pudieran reclamar terceros (Art. 3). Más aún, según lo establecido en su Art. 9, los tramites de anotación en el Registro caducaran de pleno derecho ante el requerimiento que pudiera efectuar un titular dominial. Es decir que los campesinos que estarían en condiciones de demostrar ejercicio de la posesión –algunos por varias décadas-, se ven privados de este derecho a través del mecanismo previsto en su Art. 8 el cual establece que se procederá a notificar al titular de la parcela a efectos de que ejerza sus derechos.

En esencia, para quiénes son poseedores no supone un avance respecto de lo que establece el Código Civil. El cual establece en el Art.2505: *“La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas”*.

Ley N° 9150/04. Esta norma dictada de manera complementaria a la anterior, estableciendo procedimientos adicionales para el “saneamiento de títulos” y para proceder en casos donde se presenten conflictos de parte. Los objetivos que se plantea son los siguientes:

- La realización de todos los actos y trámites que resulten necesarios y conducentes para el saneamiento de los títulos de propiedad para obtener el registro real de dominio y el relevamiento de la situación posesoria de inmuebles urbanos, rurales y semirurales.
- La ejecución de las tareas necesarias para determinar los inmuebles en situación de irregularidad o conflicto dominial y la búsqueda de los antecedentes que resulten necesarios para solucionarlo.
- Prestar asesoramiento técnico a los ciudadanos que tengan problemas para la obtención del título de propiedad.
- Promover y auspiciar toda iniciativa de saneamiento de títulos de dominio sobre inmuebles.

En la práctica se verifica que estos objetivos no se alcanzan: El Registro de Poseedores no está operando, hasta el momento de escribir este trabajo no se ha producido ninguna inscripción en el mismo, ni consecuentemente, una anotación marginal en las constancias del Registro General de la Propiedad donde quedaría asentada la propiedad. El titular de la Unidad Ejecutora –organismo administrativo creado por el Ejecutivo para operativizar las disposiciones de esta Ley- Sr. Isaac López, en una entrevista reconocía las *“demora del trámite del juicio atento su carácter altamente burocrático”*, entre otros motivos porque *“en la actualidad la solicitud de informes a la Dirección de Catastro demora como mínimo un año”*. Tampoco se presta adecuado asesoramiento técnico cuando se presentan casos que tienden a la regularización de títulos de propiedad. Esto porque en el trámite previsto intervienen diversos organismos y no se posee información cierta sobre la manera de actuar en estos lugares.

Según se desprende de esta normativa provincial, así como de disposiciones establecidas en el Código Civil, tanto el registro de la propiedad como el organismo catastral, resultan piezas clave para asentar cuestiones dominiales. Veamos entonces lo que ocurre con el Registro de la Propiedad

Intervención al Registro de la Propiedad

Esta institución había resultado mencionada en algunas oportunidades –especialmente por parte de empleados que trabajan allí- como un lugar donde se estaban fraguando títulos de propiedad. Con fecha 10 de mayo de 2006 el Poder Ejecutivo provincial dicta la primera disposición que interviene esta institución reconociendo que se estaban produciendo maniobras irregulares e ilícitas en las tramitaciones llevadas a cabo allí. (Decreto N° 536/06). La disposición de intervención señalaba como objetivo la necesidad de una: reorganización de la administración; normalización del Registro; mejora integral y continua del sistema y consolidar los cambios implementados. Para ello se dictaron las normativas posteriores (Decretos 1208/06 y 277/07) las cuales autorizaron junto a la reorganización administrativa y superintendencia del personal (incluyendo traslados y medidas disciplinarias), investigaciones administrativa y judicial al personal para deslindar responsabilidades frente a ilícitos que se habían cometido en esa repartición. Si bien la disposición de intervención tiene fecha 10 de mayo de 2006, según se mencionaba en la prensa local (diario La Voz del Interior 11-5-06), las actuaciones administrativas y judiciales comenzaron el día 28 de abril de 2006.

Situaciones que rozaban el escándalo llevaron al ejecutivo provincial a disponer esa intervención, luego que tomaran estado público una serie de maniobras fraudulentas que tenían en el Registro su principal centro de operaciones. Una de las maniobras más frecuentes consistía en suprimir (retirar y destruir) folios de dominios correspondientes a un inmueble, insertándose luego un folio falso. Con esto se emitía documentación que acreditaba el dominio, la cual a menudo era aprovechada para tomar créditos en instituciones bancarias poniendo como garantía estas escrituras falsas, pero cuya autenticidad se veía avalada por firma de un profesional escribano y por informe del Registro de la Propiedad de Córdoba. Estos procedimientos se dieron tanto en inmuebles desabitados como en otros ocupados por sus dueños.

Cabe destacar que algunos de los casos más resonantes se dieron justamente en la zona aquí estudiada, caso familia De Luca, unas tres mil hectáreas. Por otra parte el titular de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, señaló que en la zona norte hay unos 10 campos usurpados con la misma metodología.

Además del Registro de la Propiedad, en estas maniobras intervinieron otras instituciones del Estado, como la Inspección de Sociedades Jurídicas autorizando el funcionamiento de

empresas fantasma –Establecimiento Morrison SA-, Juez de Paz de Lucio V Mansilla Julio Luna, e instituciones sociales como en Colegio de Escribanos de la Provincia algunos de cuyos afiliados se encuentran detenidos y procesados (diario La Voz del Interior, del 28-04 al 20-05-06-

Esta situación que estalló en 2006 pero que venía gestándose desde al menos tres años antes y que hasta el presente no ha dado muestras de una actuación firme por parte del aparato estatal para castigar fuertemente a los desposeedores y sus cómplices, permiten inferir el bajo interés de los funcionarios por aplicar las leyes de la república a los miembros de los grupos económicamente poderosos.

Además de los hechos expresados en disposiciones legales de variado orden, es posible observar ciertas explicaciones que se producen desde el poder legalmente establecido a través de diversas manifestaciones.

b) Los discursos desde el Estado¹

Los agentes del Estado –miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo– construyen una trama discursiva que se teje en torno a una santísima trinidad de asuntos incuestionables: a) la lógica del capital b) la propiedad privada c) la desigualdad naturalizada. Desde este núcleo de “sentido común”, los agentes del Estado unánimemente explican el avance de la frontera de la soja, la concentración de la tierra, la disolución de las formas de producción comunitarias, la destrucción del ambiente como fenómenos inexorables, ajenos a las capacidades de acción o de regulación de cada uno de ellos. Los procesos económico sociales se naturalizan y los agentes estatales, en el mejor de los casos reclaman algunas soluciones técnicas o denuncian casos puntuales, en el peor, cantan loas al progreso del modelo..

Así, el Ministro de Producción provincial , explica la lógica del capitalista rural, en clave de rentabilidad económica, para explicar la expansión de la frontera de la soja: “.....al

---

¹ El corpus discursivo analizado está conformado por entrevistas a: Isaac López, Presidente de la Unidad Ejecutora Ley Provincial 9150 Tierras para el Futuro; el Scretario de la sección legales de la Agencia Córdoba Ambiente; Juan Schiaretto, Ministro de Producción y Finanzas(diálogo periodístico publicado en la página web del gobierno de la Provincia de Córdoba, fecha 03/01/2003). A representantes del poder judicial con activa participación en la zona de conflicto: José Manuel García Reyna, ex Juez Civil de Deán Funes, actual camarista de 8º nominación, Cámara en lo Civil; Dr.Serafín, Camarista de Deán Funes, al Fiscal (de Cámara) de Deán Funes. Finalmente, se analiza como parte del corpus, un Informe redactado por la Defensoría del Pueblo: Informe sobre situación campesina en nor-noroest-oeste de la provincia de Córdoba, fecha 30/10/2006.

expandirse la frontera agropecuaria, es la soja el cultivo que mejor se adapta a las regiones que antes no se dedicaban a la agricultura en la Provincia. Está vinculado también a que nuestro productor hace la cuenta costo-ingreso y está viendo que le conviene porque le da mayor rentabilidad el producto. Estos son los dos elementos que indican por qué crece la soja y por qué decaen los otros cultivos.”

Mientras que el Defensor del Pueblo, funcionario del gobierno Nacional, y receptor de las denuncias campesinas, introduce el problema explicando la lógica de la valorización de la tierra: “...*las nuevas tecnologías y la demanda del mercado mundial hacen que estos montes nativos, anteriormente de escaso valor empresarial (como no fuera para la explotación maderera tradicional), cobren en la actualidad gran importancia económica por la vía de la explotación intensiva previa la tala, a veces indiscriminada, provocando la aparición de muchos interesados en esas tierras antes despreciadas.”*

Y desde el Poder Judicial, el camarista Serafín de Dean Funes, incorpora al diagnóstica el tema del biodiesel: “*El corredor sobre todo la ruta 9 norte, que abarca parte de Tulumba, Sobremonte y Villa María del Río Seco, esos campos costaban 200 pesos hoy valen entre 2 y 4 mil dólares mínimo la ha. Aumentó la tecnología: la semilla, y la siembra directa ha provocado que los campos suban el valor. Con la expectativa del biodiesel se avecina una suba aun mayor.”*

Frente a la magnitud del desmonte, desde la Agencia Córdoba Ambiente perteneciente al gobierno provincial, se procuran acciones que podemos incluir en las estrategias de legitimación: sin recursos económicos, intentan procedimientos para evitar el desmonte masivo, prohibido por ley. Pero es casi intentar tapan el sol con la mano.

“...Hay varios tipos de intervención... lo pueden sacar de raíz, lo pueden cortar con sierra, con lo que sea...generalmente los rastros que quedan son los troncos del árbol ; destroncan rápidamente entonces después cuesta ... si no tienen el producto –la leña, por ejemplo- es difícil llegar a saber cuándo han hecho la intervención. No están las pruebas del delito y se complica la tarea... Los incendios se utilizan como un medio de excusar la deforestación... Se ha formado una comisión de un grupo de 10 inspectores que realizan todo lo que se llama relevamiento de la zona (en todo Córdoba), Córdoba se ha dividido en cinco partes , vendrían a ser los cuatro puntos cardinales más el sector central de Córdoba. Son dos inspectores por zona que realizan todo tipo de controles –forestales, de fauna, de todo lo

que se les cruza...” (funcionario de la Agencia Córdoba Ambiente). Sentada la premisa de la rentabilidad como un valor incuestionable al ser interpretada motor del progreso, aparece otro dogma de antigua data, reforzado por la proclamación de los derechos individuales del liberalismo y que atraviesa la legislación y sus aplicaciones: la propiedad privada. Así nos dice el juez de Dean Funes: “... *el cerramiento obedeció a que el ser humano tiene respeto a la propiedad. En el monte había un valor forestal importante y no era lindo que alguien viniera y se quedara con lo de uno. Aparte te demarca. El problema del cercamiento es como delimitar físicamente lo que poseyó uno y lo que poseyó otro*”.

Las propiedades comunales propias de la tradición de la agricultura caprina son impensables en la legislación de cuño liberal. Mientras la tierra del noroeste cordobés careció de valor inmobiliario, las prácticas culturales asociativas se sostuvieron en parte al margen. en parte en tensión con los títulos de propiedad. Pero cuando se valorizan las tierras empieza la guerra por la apropiación privada, también en los estrados judiciales: *Si bien el problema de tierras ha existido siempre acá en el norte, porque mucha gente poseedora de las tierras no ha llegado ha conseguir el título, por razones económicas el problema se ha acentuado a partir del 2002. A mí me parece que de acá a tres años el problema desaparece. Porque se alambra y se acabó el problema. Hoy no se sabe adonde llegan los límites. Las referencias que tiene la gente son muy imprecisas (Juez Serafín)*

Cuando el criterio es que si “se alambra se acabó el problema” entonces queda clara la perspectiva de que el papel del Estado consiste en emparejar la dupla posesión-título. Sin embargo es imposible desconocer algunas controversias: El actual gobierno creó un Registro de Poseedores, como vimos, con intenciones de contribuir a regularizar la situación, el funcionario que se encuentra al frente del mismo señala:”...*En muchas de estas zonas no hay títulos, entonces la gente por ahí no tenía una conciencia clara de que era propietario por el solo hecho de haberlo poseído durante un tiempo determinado, como establece la legislación argentina y por ahí no se sentían dueños, la función de nuestro organismo, una de ellas ha sido esa, concienciar a la gente que son propietarios y que eso puede tener algún otro rédito económico y ha hecho que mucha gente permanezca en el lugar (Isaac López) .*

Un juez (Serafín), considera en cambio que no era necesaria esta instiución para regulariazar la propiedad de las tierras por cuanto el Código Civil es suficientemente claro

al respecto al reconocer la propiedad veinteañal: *“La zona norte tiene un problema de tierras que en algunos casos fueron jamás declaradas, jamás catastradas, tiene títulos que se han perfeccionado a través de los tiempos. Por ejemplo, sucesiones que eran importantes y sin recurrir a letrados, quizás por los costos, . Es tierra que corresponde a la gente que está ocupando esa tierras porque hace más de 20 años que está ejerciendo la posesión. El Estado no se ocupó en regularizar esa situación , porque podría ocuparse y lograr un saneamiento de títulos en forma rápida”*, hace referencia a que se puede actuar desde el Estado a través de este mecanismo sin más.

Si nos atenemos a los resultados de ese Registro, como vimos en el título anterior ningún poseedor ha conseguido hasta el momento legalizar su propiedad . Por contrapartida, muchos poseedores que tienen estos títulos precarios, al registrarse en este sitio quedan expuestos para que “interesados” en obtener estas tierras que como hemos visto se están valorizando de manera importante, recurran a los más variados mecanismos para apropiárselas.

Así las cosas aparece el problema de la desigualdad como hecho cultural, como herencia insoslayable. En palabras de un funcionario judicial, *“...La forma de solucionar esto es que el Estado hiciera todo de oficio: agrimensores a cargo del estado que hagan las mensuras, que ponga abogados para que inicien los juicios de usucapión y les terminen dando los títulos ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión cultural: les darían los papelitos y con el tiempo volverían a lo mismo. Porque transferirían esos lotes por boletos de compra venta no accederían al registro, lo dividirían, la mitad para vos, la mitad para tu hijo y renacería el problema.”* (García Reyna, ex juez civil de Deán Funes.)

El testimonio de este juez es particularmente significativo, porque en la década de los ´80 jugó un papel importantísimo en detener una estafa que pretendía inventar títulos a una firma fantasma para varios miles de hectáreas de la zona. Sin embargo, le resultan insolubles las situaciones planteadas y se resigna al avance de los “poderosos”.

Y como en el cuento de Kafka, en todas partes hace falta un abogado. Según el fiscal del juzgado de Deán Funes *“todos los que vienen aquí todos tienen abogados. No vemos el indefenso, el campesino ignorante”*. El fiscal explica cómo es el circuito judicial que en general se inicia tanto desde lo civil como en lo penal. *“Van juntos, al mismo tiempo. Lo que sí puede suceder es que el juez civil no dicte sentencia hasta no resolver lo penal . (...)*

porque puede ser que un tipo tenga un título perfecto y se entera que hace tres años hay otro en el campo. Inicia un juicio de desalojo. Eso es civil . Pero hace una denuncia penal, dice sáqueme esta gente de acá. La usurpación está muy vinculada a lo civil. En lo penal se ve sólo quien poseía y quien desposeía.(...)

La necesidad de recurrir al aparato judicial por parte de los campesinos es doblemente preocupante: Según el informe de la Defensoría del Pueblo existe una “*gran dificultad de los campesinos para acceder a la justicia, sea por desconocimiento de los mecanismos legales, sea porque es muy difícil conseguir abogados que los defiendan o sea por carecer de dinero para el pago de las tramitaciones judiciales.*

Y agrega García Reyna “*Mientras tanto el que está en el campo es gente mucho más sencilla que aplica un poco el sentido común y dice ‘Yo estoy aquí, esto es mío y de aquí nadie me va a sacar, nadie me va a mover’ y entonces no termina tomando ninguna medida y cuando se descuida, todo el aparato estatal legal movido por el otro le pasa por encima. No porque haya arbitrariedad, injusticia por el juez, sino porque él no hizo valer el derecho por los medios legales.*

Como se puede apreciar hasta aquí, no se trata fundamentalmente de ignorancia o descuido de parte de los sectores campesinos sino de verdaderas organizaciones orientadas a la desposesión. La Defensoría del Pueblo, describe con claridad los mecanismos desposesorios:

- Existe una situación de indefinición jurídica y catastral, la que es aprovechada por empresarios particulares, con una metodología consistente en comprar tierras que teóricamente aparecerían como deshabitadas y accionar judicialmente sobre los poseedores reales bajo la acusación de intrusos.
- Se registra una práctica generalizada –que ha sido observada por funcionarios de esta institución- de demoler las viviendas de los campesinos simultáneamente con el acto de desalojo, la cual parecería estar destinada a borrar toda huella de antigua posesión y actividad productiva sobre el terreno en disputa.
- Se encaran acciones combinadas de desalojo vía judicial, con procedimientos de acorralamiento consistente en apropiarse de las tierras, alambrar de modo tal de cercar las viviendas de los poseedores con promesas verbales de dejar pasos y hasta conceder pequeñas parcelas para uso doméstico. Sumado a graves amenazas y

agresiones verbales y físicas de parte de civiles armados o la quema de cercos y sembradíos y la matanza de animales como modo de hostigamiento para que, agobiados, los campesinos terminen por vender su posesión y decidan radicarse en la ciudad.

- Se consolida un injusto sistema de distribución del agua en beneficio de los empresarios que perjudicaría seriamente a los sectores más vulnerables y acarrearía serios problemas para la salud de la población. A ello se le suma el deterioro alarmante de los servicios de salud pública sólo aliviado en parte por la propia acción social de los pobladores mediante sus asociaciones civiles.

En expresiones de un funcionario judicial este proceso es descrito de la siguiente forma:

“se trata de verdaderas organizaciones. Buscan un insolvente lo meten en un campo que está en producción. Apenas ingresa presentan un statu quo y hasta que la justicia civil demora en solucionar el problema, pasa un par de años levantan un par de cosechas .... Hay un reguero de gente que sin ningún tipo de consideración a la ley, fabrica títulos. Esto quiere decir que hay un resquicio o alguna inacción estatal, porque si alguien fabricó un título alguien se tiene que dar cuenta rápidamente, pero segundo, si con ese título totalmente ilegal toma posesión hay gente que se presta para poner en posesión a quien no debe porque incluso ponen en posesión en campos que están ocupados...” (Juez Serafín)

c) Sentencias

Como señaláramos anteriormente el Estado no es un bloque homogéneo, esto pudo observarse respecto de las explicaciones proporcionadas por sus propios agentes, los cuales atendiendo a las diversas fuentes relevadas, en ciertos casos producen explicaciones apelando a justificaciones económicas, en otros casos denuncian complicidades y ausencias, pero en general, los diagnósticos tienden a mostrar “fallas” contingentes, antes que resultados de lógicas de acumulación. En ningún caso se observa que los funcionarios reconozcan su propia responsabilidad en las “fallas” descritas.

Otro espacio del accionar estatal donde se puede ver esta heterogeneidad es el del Poder Judicial. Veamos dos sentencias² dictadas en los últimos meses en nuestro territorio de observación: el caso Vicente Campos, o Doña Alonsa, y el caso de la Familia Bustamante.

---

² Si bien estos son sólo dos casos, el equipo de investigación está trabajando en una sistematización de las sentencias producidas por la Cámara de la región sobre los temas usurpación, usucapión y que hacen visible el conflicto en cuestión

El primer caso ocurre en una propiedad que registra antecedentes dominiales por más de 100 años para un grupo de familias, donde Doña Alonsa, una anciana de unos 80 años, opera como madre de hijos propios y de familiares cercanos, y en la cual un “ahijado” de una de esas familias originariamente dueña de la tierra –Vicente Campos-, es cooptado por un importante productor sojero del sur provincial –Bima- para que le venda el campo en cuestión.

En el marco de esta venta, el imputado recurre a diversos mecanismos como intimidación a sus vecinos, cercamiento de tierras y aguadas, etc. hasta que resulta demandado como usurpador. Luego de un jugoso procedimiento judicial se dicta sentencia ordenándole cesar en tales procedimientos, se reconoce la titularidad del campo al hijo de Doña Alonsa, se le imponen costas del juicio al acusado y se informa a otro tribunal acerca de la conducta del empresario Bima para que tome las acciones que pudieran corresponder.

Este caso que podría aparecer como ejemplar es casi único, los casos más frecuentes son los que muestran hechos semejantes a los de la Familia Bustamante.

Aquí, la misma Cámara Civil, Comercial, Laboral y Penal de Dean Funes ordena el desalojo de una familia, compuesta por numerosos miembros que viven en un paraje en la costa de las Salinas Grandes. En este caso, aún reconociendo la posesión que el padre de esta familia, Roberto Bustamante, ejerció por más de 20 años, entrega las tierras a quien acredita un título de compra del año 1975, sin haber hecho ejercicio de la propiedad, viviendo a más de mil kilómetros de distancia hasta el año 2001.

Como se ve, aún habiéndose acreditado los hechos que la paropia ley establece, los tribunales tienen un comportamiento contrario a derecho.

Posicionamiento Frente al Despojo: el Movimiento Campesino³

La segunda parte de esta investigación estudia la manera que resisten las familias campesinas la desposesión. Simplemente a modo de adelanto mostramos algunas percepciones de estos actores sobre la situación.

---

³ A partir de una entrevista a Joaquín Gonzáles, abogado defensor del Movimiento Campesino y documentos del Movimiento Campesino de Córdoba

Una cuestión importante que se presenta es hacer frente a una dualidad: la cultura ancestral de una existencia colectiva no sólo en lo referido a la producción, sino a los diversos aspectos implicados en la vida vs. la exigencia de tener que realizar presentaciones individuales a los fines de defender sus posiciones en estrados judiciales, aún en los casos en que se presentan situaciones idénticas por parte de varios tenedores de predios. Aunque la tierra sea “utilizada de manera colectiva, si el atacado es Juan Pérez, es él quien tiene que defenderse”

Otro aspecto se vincula con el hecho de reconocer que el Estado no es la “manifestación del bien común” como en principio podría parecerles. Así, las familias campesinas han encontrado que la organización se convierte en la pieza clave para tratar de detener el despojo. Por ello, si bien encaran acciones judiciales a nivel individual, tratan de concebirlas en el marco de acciones colectivas y que trasciendan más allá del escenario de los juzgados.

Empiezan a incorporar que, salvo contadas excepciones, no pueden contar con el Estado, no sólo porque una de sus lógicas centrales es en beneficio de la propiedad privada: “¿cómo juega el Estado?, es un embudo, un embudo hacia la propiedad privada...” sino, porque aún en casos donde la propiedad corresponde a los campesinos, aplican los procedimientos que favorecen la lógica del capital concentrado recurriendo a la desposesión... “y después la criminalización, ni hablar, incluso a costa del Derecho” (Joaquín González).

Esto permite entender la profunda crisis de legitimidad que se da ante situaciones de desinstitucionalización y desocialización, en donde los individuos ni muchos grupos sociales no encuentran instituciones en las cuales reflejarse y menos aún confiar. Aquí se avisa claramente el quiebre entre la racionalización y la cultura. Aquí vemos al actor social tratando de reconstruir su capacidad de acción, en un proceso de lucha contra el capital, los mercados, la hegemonía global

Frente a esta crisis de instituciones se produce un rescate de valores y experiencias previas a los procesos donde el Estado jugó un rol central. El movimiento campesino, a semejanza de lo que puede observarse con diversos movimientos sociales contemporáneos de América Latina en la última década, encara prácticas en las cuales combinan trabajo, identidad cultural, defensa del territorio y del ambiente, procurando conservar su autonomía y

articulándose en redes extensas como la que conforma la Vía Campesina por ejemplo. (Zibecchi 2003).

5. Interrogantes finales

Hemos tratado de mostrar el papel del Estado como agente activo en la desposesión observando su intervención en línea con el actual modelo de acumulación, aunque tratando de legitimar su actuación presentándose como garante de un interés general.. Estamos trabajando en el análisis de las respuestas del movimiento campesino que plantean alternativas no sólo políticas, sino de reproducción ampliada de la vida, que resisten desde su tradición pero tratando de resignificar los lazos solidarios tradicionales en los nuevos contextos.

Una de las cuestiones a develar sería ¿hasta qué punto podrán los movimientos campesinos articular con otros movimientos que resisten al actual sistema?, e incluso ¿es posible imaginar que estas resistencias puedan constituirse en herramientas que hagan posible otras hegemonías?

Si como afirman los autores postcolonialistas que hemos tomado como referentes, nos encontramos en un momento de transición, donde “el sistema histórico basado en la acumulación incesante ha llegado a su fin”, ¿es posible interpretar que el modelo de acumulación que enfatiza la desposesión es una manifestación de ello?, o tal vez ¿se trata de un recurso más, tan antiguo como el propio sistema, que se pone en funcionamiento cuando el modelo lo requiere?

Si pensamos que nos encontramos en el momento histórico donde el sistema está debilitándose, ¿cuáles serían las principales alternativas de las “configuraciones emergentes”? ¿Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de un cambio realizado desde Estados con un potencial transformador diferente como el que sugieren países como Bolivia o Venezuela?, en ese caso ¿sería factible que tales Estados pongan en cuestión el modo de acumulación capitalista? y consecuentemente ¿se romperá el vínculo histórico entre Estado y acumulación?

O tal vez nos enfrentamos a posibilidades: donde los movimientos campesinos en articulación con otros movimientos sociales pueden llegar a coformar alternativas de sociedad autónomas?

Lo que parece asomar como certeza es que tales posibilidades no están definidas de antemano y que de algún modo se presentan en el imaginario de numerosos actores sociales con algún grado de factibilidad. Esto sería singular del momento, que al presentarse como contingentes abren espacios para el ejercicio electivo de los agentes

BIBLIOGRAFÍA

Amir, Samin. Mas allá del capitalismo senil. Por un siglo XXI no norteamericano. Ed. Paidós. Buenos Aires, México, Barcelona. 2003

Borón, Atilio “Estado, capitalismo y democracia en América Latina” Colección Secretaria Ejecutiva, Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agosto 2003.

Ceceña, Ana. Comp. Hegemonía y Emancipaciones en el Siglo XXI. CLACSO. Buenos Aires, 2004.

Domínguez, D. Y Sabatino P. Con la Soja al Cuello: Crónica de un País Hambriento Productor de Divisas. En Los Tormentos de la Materia, Héctor Alimonda comp. Ed. CLACSO. Colección Grupos de Trabajo. 2006.

Grassi Estela. Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (1) Espacio Editorial. Buenos Aires 2003.

Harvey, David, “El nuevo imperialismo. Acumulación mediante desposesión”. En Revista Herramienta. N° 29. Junio 2005. Buenos Aires.

Laclau, Ernesto. “Teoría marxista del Estado” en Estado y política en América Latina, edición preparado por Norbert Lechner. Siglo XXI. México, 1997.

Lebowitz Michel Mas allá del capital. La economía política de la clase obrera en Marx I Ed. Akal Madrid, 2005

Wallersteinn Inmanuel. Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Siglo XXI. México, 2001

Zibecchi, R: “Movimientos sociales latinoamericanos”. OSAL, Observatorio Social de América Latina, enero de 2003.